

De la violencia banalizada al terror: el caso colombiano	Título
Pecaut, Daniel - Autor/a	Autor(es)
En: Controversia no. 171. (diciembre 1997). Bogotá : CINEP, 1997.	En:
Bogotá	Lugar
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP)	Editorial/Editor
1997	Fecha
	Colección
Identidad colectiva; Guerrilla; Paramilitarismo; Institucionalidad; Política; Terror; Violencia; Colombia;	Temas
Artículo	Tipo de documento
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Colombia/cinep/20100916014110/politicaysociedaddelaviolenciabanalizadaControversia171.pdf	URL
Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.0 Genérica http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/deed.es	Licencia

Segui buscando en la Red de Bibliotecas Virtuales de CLACSO
<http://biblioteca.clacso.edu.ar>

Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
 Conselho Latino-americano de Ciências Sociais (CLACSO)
 Latin American Council of Social Sciences (CLACSO)
www.clacso.edu.ar

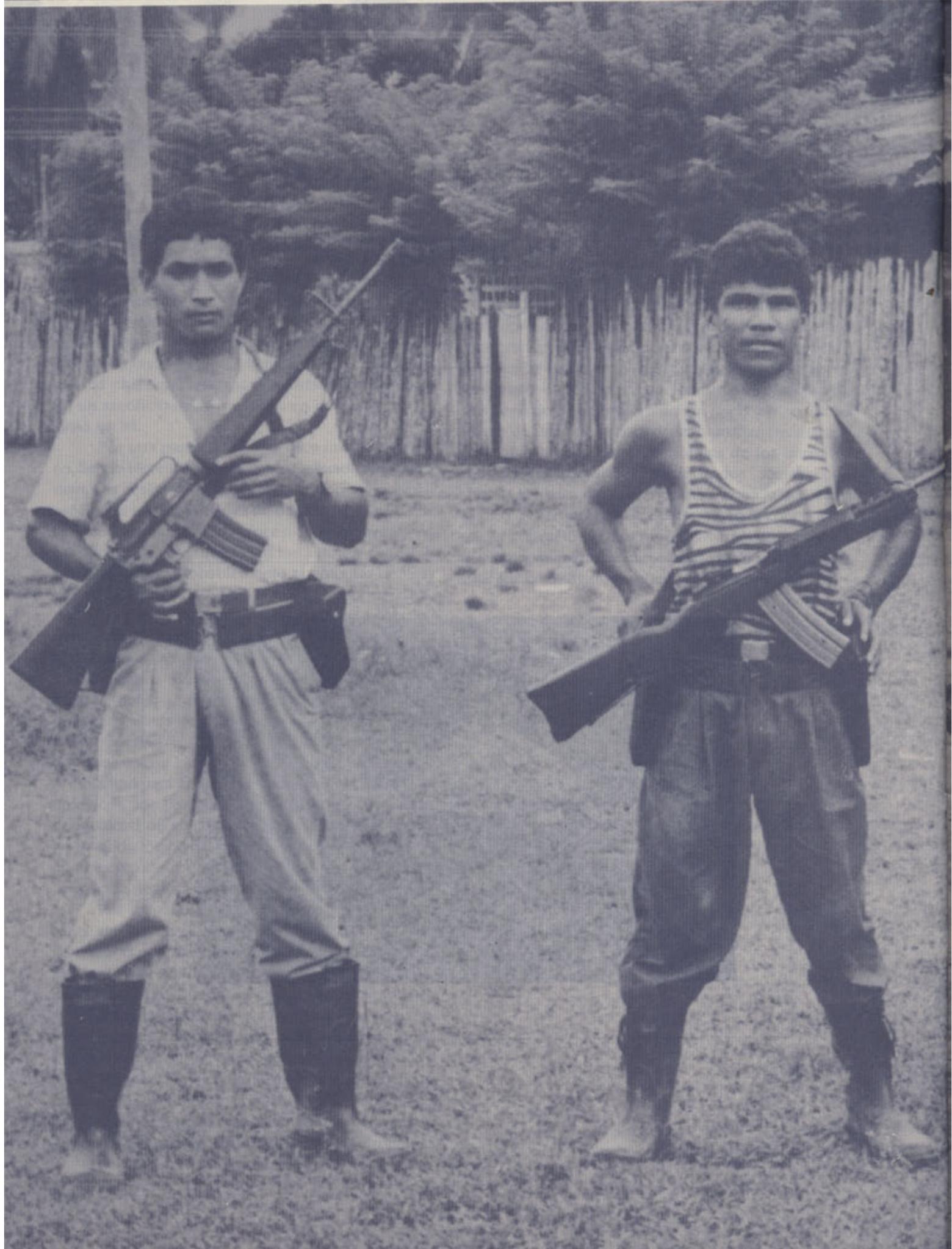


Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales
 Conselho Latino-americano de Ciências Sociais
 Latin American Council of Social Sciences



POLÍTICA
Y SOCIEDAD







DE LA VIOLENCIA BANALIZADA AL TERROR: EL CASO COLOMBIANO¹

DANIEL PECAUT²

1 Traducción realizada por Emmanuel Raison y corregida por Fernán González.

2 Sociólogo del Centro de estudios de movimientos sociales, Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, París.



Desde 1980, Colombia es nuevamente el teatro de una violencia de excepcional intensidad. La tasa nacional de homicidios supera regularmente el 70 por 100.000 habitantes, una de las tasas más altas del mundo. En algunas regiones o ciudades del país, el promedio alcanza 400 por 100.000. Entre 1980 y 1995, el número de las víctimas superó los 300.000.³ Las masacres colectivas de cinco personas o más son innumerables: solamente entre los años 1988 y 1993, se cuentan más de 900 de ellas, que provocaron más de 5.000 víctimas⁴. Otros muchos indicadores van en la misma dirección: se cuentan por millares los militantes políticos y sindicalistas asesinados; un partido político, la Unión Patriótica (UP), fue diezmado⁵ y prácticamente borrado del mapa; el número anual de secuestros oficialmente reseñados desde 1990 oscila entre 1.000 y 1.717 (número máximo al que se llegó en el año 1991); más de 500.000 personas han tenido que abandonar su región de origen; las prácticas de extorsión y chantaje han llegado a volverse rutinarias en gran parte del territorio.

Una violencia semejante se expresa en muchas zonas rurales y urbanas mediante situaciones de terror, especialmente en los sitios donde varias fuerzas se disputan el control de un mismo territorio, como, por ejemplo, el Magdalena Medio y la región de Urabá. Allí, no dejan de estar al orden del día las masacres, los éxodos, las exacciones, las atrocidades y las sospechas, que afectan a una población sometida a la ley del silencio. Además, los años 1987-1993 se caracterizaron por el terrorismo, ciego o no, llevado a cabo por los narcotraficantes y las fuerzas oscuras aliadas con ellos.

Por eso, puede llamar la atención el que tal situación no haya provocado mayores reacciones de la opinión pública, nacional o internacional. Tal vez algunos acontecimientos han tenido una repercusión considerable, como el asesinato de líderes político destacados o algunas masacres particularmente sangrientas. Pero esta resonancia sólo es fugaz, sin llegar a darse nunca una indignación comparable a la que

suscitaron las atrocidades cometidas en Argentina, en Guatemala o en El Salvador.

Varios factores pueden explicar este relativo silencio. En este estudio, voy a hacer énfasis en uno de ellos: la banalización de la violencia, que disminuye la visibilidad de las situaciones de terror. Al hablar de la violencia banalizada, no quiero hacer mía la idea de 'la cultura de la violencia' que aparece a menudo en el discurso de algunos analistas colombianos. Como ocurre con frecuencia, la explicación por la cultura -y mucho más tratándose de la violencia- puede resultar un tanto perezosa y tomar un aspecto **tautológico**. Aunque es cierto que los fenómenos de violencia tienen una larga historia en Colombia y que la memoria del episodio de la *Violencia* de 1950 permanece presente en todas las mentes como una referencia que los protagonistas de la violencia actual usan como justificación, no se pueden, sin embargo, ignorar los componentes nuevos de la violencia actual. La banalidad de la violencia apunta hacia varios aspectos nuevos que son propios de los fenómenos presentes: sus dimensiones tan heterogéneas que no permiten que surja un único eje de conflicto, su ausencia de articulación con las identidades colectivas previas, las redes de dominación que tejen, las oportunidades que ofrecen, su compatibilidad con el mantenimiento, al menos formal, del Estado de derecho. Entre la banalidad de la violencia y el terror, existe a la vez continuidad y ruptura. Lo que pretendo mostrar es que se da una continuidad suficientemente fuerte para que el terror sea percibido en buena parte como una situación de hecho que no cuestiona las rutinas de la violencia, sin que existan categorías intelectuales o políticas que permitan entenderla, y menos aún darle sentido.

No volveré aquí sobre el contexto donde comenzó la violencia actual⁶. En una primera parte, voy a tratar las interferencias entre los múltiples fenómenos de violencia, para examinar, en una segunda parte, varios aspectos de la banalización de la violencia, y, en una tercera, las condiciones en las que se da el paso al terror. Finalmente, en una última parte, estudiaré las razones por las que el terror, aunque bastante real, no logra bosquejar una historia con sentido,

ni llegar nunca a constituirse como "parte de una trama narrativa"⁷, y ni alcanzar siquiera a suscitar una profunda indignación moral.



LAS INTERFERENCIAS ENTRE LOS FENÓMENOS DE VIOLENCIA

Los fenómenos de violencia, como dije, son muy heterogéneos. Los enfrentamientos entre guerrillas y fuerzas de seguridad, la acción de las fuerzas paramilitares y las de los narcotraficantes, las exacciones de las milicias urbanas, las operaciones de 'limpieza social', los asesinatos políticos, la criminalidad organizada y la pequeña delincuencia, las riñas entre bandas de jóvenes, los arreglos de cuenta y las peleas individuales: todas estas formas participan, en proporciones diversas, en la explosión del número de los homicidios.

En este conjunto, la violencia propiamente política sólo ocupa, al menos aparentemente, una parte limitada. En 1987, los analistas estimaban que solamente era responsable del 7% de las víctimas⁸. La pregunta que queda es si es posible hoy fijar todavía fronteras entre lo que es político y lo que tiene que ver con otras dimensiones. Se puede pensar que los narcotraficantes no son en principio actores políti-

cos. Pero, ¿no será que se convierten en actores políticos cuando intervienen en los procesos electorales y en las decisiones judiciales por medio de la corrupción, y más aún, cuando usan el terror de manera generalizada para someter al Estado? Por el contrario, se considera que las guerrillas son indudablemente actores políticos. ¿Pero lo siguen siendo cuando se dedican en gran parte a la extorsión y al secuestro y cuando acuden a veces a los servicios de delincuentes organizados o de sicarios? En cuanto a la violencia cotidiana, la de los crímenes comunes, de las venganzas o de los arreglos de cuentas, ¿no tiene muchas veces un carácter político en la medida en que puede traducir también una rabia social y es también consecuencia de la deficiencia de los aparatos judiciales o policivos?

¿No se puede incluso cuestionar una distinción tan básica como la que se da entre violencia 'organizada' y violencia 'desorganizada'? Los protagonistas como las guerrillas o los narcotraficantes no tienen sino una cohesión relativa. Las guerrillas son múltiples, y cada una de ellas tiene varios frentes -más de 60 en el caso de las FARC- cuyas prácticas y disciplinas distan mucho de ser idénticas. Los famosos 'carteles' de Medellín, Cali, Bogotá o de la Costa Atlántica probablemente sólo eran, incluso en su momento de esplendor, coaliciones relativamente laxas de diversos núcleos bastante sueltos⁹ y ahora que han sido parcialmente desmantelados, esos núcleos tienen una autonomía aún mayor. En el caso

3 Esta cifra se obtiene sumando los homicidios anuales a partir de los datos oficiales facilitados por la policía. Cfr. Policía Nacional, *Criminalidad 1995*, República de Colombia, 1996, gráfica # 1. A partir de estos totales conviene calcular el número de homicidios que corresponde a una situación "normal" en Colombia, que, de todos modos es bastante alto. Incluso durante los años sesenta, rara vez el promedio de homicidios estuvo por debajo del 15 por 100.000.

4 María Victoria Uribe y Teófilo Vásquez, *Enterrar y Callar*, Bogotá, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, 1996.

5 Según los cálculos, el número de muertos de la UP oscila entre 1.500 y 3.000.

6 Para este propósito, recomiendo los libros de la Comisión de estudios sobre la violencia, *Colombia, Violencia y Democracia*, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, 1987; M. Deas y F. Gaitán Daza, *Dos ensayos especulativos sobre la violencia en Colombia*, Bogotá, Departamento Nacional de Planeación, 1995, los dos volúmenes de la revista *Controversia*, No 151-152 y 153-154 publicados con el título *Un país en construcción*, en 1989, y mi capítulo "Présent, passé, futur de la violence" in J.M. Blanquer et C. Gros, *La Colombie à l'aube du Troisième Millénaire*, Paris, Editions de l'Institut des Hautes Etudes de l'Amérique Latine, 1996.

7 A propósito de la noción de constituirse "parte de una trama narrativa", cfr., Paul Ricoeur, *Temps et Récit*, tomo I, París, Le Seuil, 1983.

8 Según los cálculos presentados por los autores del estudio citado más arriba *Colombia, Violencia y Democracia*. Después, esta cifra fue repetida con frecuencia, sin profundizar más en su verificación.

9 Cfr. Darío Betancur y Marta García, "Colombie: les mafias de la drogue", en *Problemes d'Amérique Latine*, # 18, jui-sept 1995, págs 73-82.



de los paramilitares o de las milicias urbanas, generalmente las bandas son todavía mucho más inestables y más importantes sus relaciones con la delincuencia, a pesar de que desde hace poco se han venido formando grupos fuertemente centralizados, con cobertura departamental. Incluso, la misma delincuencia propiamente tal no se reduce sólo a algunas bandas independientes o de individuos, sino que comprende también amplias organizaciones con numerosas ramificaciones. Los mismos policías son un ejemplo de ello, ya que algunos de ellos manejaron durante un tiempo con mucha competencia el comercio de carros robados. La corrupción, que toca todas las organizaciones y los sectores sociales, reduce aún más la posibilidad de distinciones marcadas. Además, las cifras parecen sugerir una correlación entre la presencia de protagonistas 'organizados', incluyendo las guerrillas, y la difusión de la violencia 'desorganizada'.

Una de las razones por las cuales se han vuelto fluidas las fronteras entre violencia política y no-política, lo mismo que entre violencia organizada y desorganizada, es el hecho de que todos los protagonistas con capacidad de acción armada se encaminan desde ahora, como medio o como fin, al control de los polos de producción económica del país.

La expansión de la economía de la droga, sea de la marihuana en los años 70, de la cocaína desde 1975, y de la heroína ahora, ha jugado un papel esencial en el desplazamiento de lo que está en juego en la violencia. En particular, las dos últimas producciones

se implantaron en regiones ya controladas por una de las guerrillas, las FARC, o en las cuales no tardaron en instalarse. La existencia de una guerrilla de larga tradición aseguraba la protección de los intereses de los narcotraficantes, cultivos y laboratorios, que eran protegidos contra excursiones de las fuerzas de seguridad. A cambio, las FARC se beneficiaban de repente de una renta financiera gracias a los impuestos exigidos tanto a los cultivadores como a los intermediarios del tráfico. De esa forma, al cabo de pocos años, esta guerrilla pudo duplicar el número de sus frentes y de sus miembros. Y en buena parte, gracias a su iniciativa se efectuó el crecimiento del cultivo de la amapola a partir de 1990.

Después del control de la economía de la droga, la lucha se extendió a la búsqueda del control de la mayoría de los polos de producción de materias primas. Otra organización, el ELN, casi aniquilada en la mitad de los años setenta, renació de sus cenizas gracias al control que ejerce sobre las regiones productoras de petróleo, y a las funciones financieras que puede realizar. Poco a poco fue ocurriendo lo mismo con otros polos de producción minera, como el ferroníquel, el oro, el carbón, y los de agricultura comercial, como la producción del banano en Urabá, de la palma africana o las numerosas regiones de ganadería extensiva. La extorsión y los secuestros se han vuelto prácticas generalizadas. Las zonas cafeteras, que habían permanecido por mucho tiempo fuera del alcance de los protagonistas de la violencia, sufren ahora el dominio de los narcotraficantes y de las guerrillas al tiempo que muestran un nivel increíble de violencia desorganizada. En cuanto a la zona esmeraldífera, los grandes grupos de 'autodefensas', instalados allí desde siempre, la protegen de las guerrillas, pero no de la violencia¹⁰. De manera general, el mapa de implantación de las guerrillas coincide con el de los polos de producción primaria; y la misma coincidencia se observa entre estos polos y el mapa de la violencia rural, organizada o desorganizada.¹¹

El hecho de que las guerrillas hayan asumido como objetivo prioritario el control de esos polos económicos tuvo como consecuencia la transformación de las interacciones entre todos los actores con

capacidad armada. En las zonas de cultivo y de transformación de la droga, es imprescindible cierta cooperación entre guerrillas y narcotraficantes, pero se necesita también la colaboración implícita de otros actores locales como militares, policías, y políticos. Obviamente, estas transacciones también generan conflictos. Al parecer, el enfrentamiento sin piedad entre las FARC y las bandas paramilitares organizadas por Gonzalo Rodríguez Gacha se desarrolló precisamente después de la violación de un contrato tácito entre guerrilleros y narcotraficantes¹². Este tipo de litigios puede también ocurrir entre guerrillas y fuerzas de seguridad, cuando las primeras exigen comisiones excesivas.¹³

Aunque las guerrillas y los narcotraficantes se ven obligadas a cooperar en las zonas de producción de la cocaína, tienen por otra parte intereses opuestos en todo lo demás. En la medida en que los narcotraficantes van invirtiendo en la propiedad terrateniente y en la ganadería extensiva -se calcula que han adquirido más de cinco millones de hectáreas de las mejores tierras- se convierten, como los otros terratenientes, en un blanco para las guerrillas que quieren imponerles sus tasas e impuestos revolucionarios. Entonces el enfrentamiento asume en esas regiones un carácter sistemático. En los otros polos de producción de riqueza, también se yuxtaponen transacciones y conflictos. Pero en ninguna parte las guerri-

llas han paralizado la producción, como si estuvieran ansiosas de preservar sus fuentes de financiación. Pueden proteger las empresas y propietarios que están 'al día' con los impuestos fijados. Otras modalidades de transacción son la corrupción de la clase política por los narcotraficantes y las presiones a las que la someten las guerrillas¹⁴. Así se redefine el marco de las interacciones estratégicas con base en interferencias de gran diversidad y fluidez.

El resultado de todo esto es la fragmentación del territorio de acuerdo con la dominación relativa de tal o cual protagonista. Las interferencias entre actores armados conducen a un nuevo reparto territorial según las fronteras invisibles que se establecen entre las zonas ubicadas principalmente en la órbita de poder de uno u otro. Algunas regiones han adquirido una identidad particular sólo por estar ubicadas bajo el dominio de un grupo, o, por ser el lugar de la rivalidad entre los contendientes, como el Urabá, el Bajo Cauca etc.

Como consecuencia de esto, la violencia toma un carácter prosaico. Las ideologías políticas o las creencias tienen poca influencia en los enfrentamientos. Por supuesto, las guerrillas no dejan de ser un actor político, pues su poder militar, que les permite estar presentes en la mitad de los municipios del país y hasta en las cercanías de una ciudad como Bogotá,

10 Según los momentos, las esmeraldas han representado el segundo o tercer producto de exportación. Desde hace varios siglos, la zona esmeraldifera es uno de los polos crónicos de violencia. Muchos de los más grandes y famosos bandidos provienen de esta región. Hoy en día, las minas son dadas en concesión a empresas por contrato público, pero gran parte de las exportaciones es clandestina. La mezcla de legalidad e ilegalidad otorga a esta zona, cercana a Bogotá pero al mismo tiempo aislada, una función privilegiada en las estrategias de violencia. Gonzalo Rodríguez Gacha, el compañero de Pablo Escobar, era originario de esta región. A finales de los años ochenta se desató una guerra por el control de la zona entre dos facciones rivales, que dejó varios millares de muertos.

11 Camilo Echandía, "Colombie: dimensions économiques de la violence et de la criminalité", en *Problemes d'Amérique Latine*, # 16, janvier 1995, p.74.

12 Las FARC han logrado destruir las bandas paramilitares establecidas en el Putumayo, departamento estratégico para las actividades relacionadas con la droga, pero los paramilitares de Rodríguez Gacha eliminaron a muchos colaboradores o aliados de las FARC, empezando por los directivos y militantes de la Unión Patriótica, en otras regiones, como el Magdalena Medio.

13 No es probablemente coincidencia el hecho de que muchas de las más sangrientas emboscadas de las guerrillas contra los militares hayan ocurrido precisamente en el Putumayo y el Caquetá, que son, junto con el Guaviare, los centros de la economía de la cocaína.

14 Desde algunos años, las guerrillas tratan de asegurarse el control sobre las inversiones públicas de las localidades por medio del control sobre los alcaldes, cualquiera que sea su orientación política.

15 Cfr. el análisis que presenta Alfredo Rangel en términos de estrategia militar, en "Colombia. La guerra irregular en el fin de siglo", *Análisis Político*, # 28, mayo-agosto de 1996, págs 74-84.

basta para asegurarles este estatuto.¹⁵ Sin embargo, no gozan en este momento de una credibilidad política muy reducida, pues, desde 1985, su popularidad no ha dejado de caer, y la opinión pública se manifiesta cada vez más exasperada por una lucha caracterizada por todos tipos de exacciones, y que no parece llegar a ninguna parte. Además, se trata de guerrillas que, desde mucho antes del final de la guerra fría, dejaron de encontrar las palabras para expresar lo que querían y hacer vislumbrar un futuro mejor y se quedaron mudas como si sus prácticas actuales bastaran para mostrar lo que son o lo que quieren. Ahora bien, la extorsión nunca ha suscita-

do grandes pasiones políticas. Incluso donde están mejor implantadas y disponen de mucho poder de convicción, las guerrillas dudan en lanzarse a medir sus fuerzas directamente en el terreno en el campo electoral, en parte, por causa del clima de terror, pero también por el temor de no ser seguidos por sus supuestos simpatizantes.¹⁶

La diferencia entre violencia organizada y violencia desorganizada no queda totalmente suprimida, pero las mutuas resonancias entre ambas conducen a la violencia *generalizada*, que cruza tanto las relaciones sociales como las relaciones interindividuales, influyendo tanto sobre el funcionamiento insti-



tucional como sobre los valores sociales. Esta violencia no puede analizarse según un contexto exterior previo, ni admite la intervención de un tercero en discordia. A partir de las interferencias entre todas las formas de violencia, la violencia generalizada suscita su propio contexto, sus propios modos de transacción y de confrontación y no se fundamenta en las oposiciones de clase ni en las identidades colectivas previas.

Las tensiones sociales no desaparecen sino que se encuentran en cada región. Incluso son probablemente más fuertes que nunca. La economía cafetera, que había contribuido fuertemente a la estabilidad del régimen colombiano, se hunde en una crisis sin salida. El resto de la economía agrícola no está mejor desde que la apertura económica, realizada sin precauciones en 1991, la sometió totalmente a la competencia de los productos de importación. El desempleo urbano no deja de aumentar desde hace dos años. Los salarios están inmovilizados o bajan. Además, el fin del milagro de la droga obliga al gobierno a tomar medidas de austeridad. Así, todo contribuye a exacerbar una conflictividad latente. Son los actores sociales los que hacen falta. No han dejado de descomponerse cada vez más, por razones que son comunes a muchos otros países, pero también por el efecto de la violencia. En unos casos son instrumentalizados por los actores armados, y en otros son eliminados por la violencia. Las plantaciones bananeras de Urabá ejemplifican una situación donde, a pesar de la intensidad de las tensiones sociales, los actores sociales nunca lograron afirmarse. Durante mucho tiempo, fueron sometidos a una represión tal que los dejó en extrema debilidad. En cambio, a partir del año 1985, adquirieron un poder de negociación aparentemente considerable ya que lograron concluir convenciones colectivas que se cuentan en

tre las mejores de Colombia. Pero en realidad estaban completamente subordinados a las dos organizaciones guerrilleras implantadas en la región, y de hecho se han venido debilitando muy rápidamente, tanto por el contragolpe de la guerra fratricida entre las dos guerrillas como por el terror organizado por los paramilitares¹⁷

Las identidades culturales resisten todavía peor que los intereses sociales. Es cierto que siempre han sido débiles en un país con amplio mestizaje y migración interna. Sin duda existen diferencias culturales regionales bastante marcadas, que pueden alimentar prejuicios, pero tienen muy poco que ver con la violencia. La única excepción son quizá las regiones con una fuerte población indígena, como el Cauca, donde precisamente se creó una organización guerrillera específica, el Quintín Lame. Aunque es difícil decir en este caso qué parte tiene la conciencia de identidad, y qué parte la utilización hábil del tema de la identidad al servicio de otras reivindicaciones. En el resto de Colombia, las únicas identidades permanentes son las partidistas, establecidas en el siglo XIX, que han sido muy estables desde entonces, y fueron más exacerbadas todavía por las huellas de la *Violencia* en los años 1950. Estas identidades evidencian unos fuertes arraigos, pero el contenido de estas identidades depende de las relaciones que se establecen con los poderes locales. En ese contexto, las lealtades pesan lo mismo que las identidades y pueden trasladarse fácilmente de un jefe o de un clan al otro. Por tanto, ni siquiera las tradicionales identidades partidistas sirven necesariamente de obstáculo para la instalación de redes de poder que dependen de los actores armados y la crisis de los partidos tradicionales hace todavía más fácil esa instalación.

16 En varias regiones donde la guerrilla es hegemónica, las listas electorales de los partidos auspiciados directamente por ella, desde hace diez años recogen cada vez menos votos. Culpar al solo terror de este retroceso sería ignorar la desconfianza del electorado frente a estos ambiguos partidos. En el momento presente, las guerrillas obvian esta dificultad avalando a candidatos de los partidos tradicionales, que, una vez elegidos, quedan sometidos a su vigilancia.

17 Sobre las relaciones sociales en Urabá, cf. G. Martín, "Desarrollo económico, sindicalismo y proceso de paz en Urabá", Universidad de los Andes, Tesis de Grado, 1986; F. Botero, *Urabá: Colonización, Violencia y Crisis del Estado*, Medellín, Universidad de Antioquia, 1991 y C.I. García, *Urabá, Región, Actores y conflicto 1960-1990*, Bogotá, CEREC, 1996.



LA BANALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA: CARRERAS INDIVIDUALES Y LÓGICAS DE PROTECCIÓN

La noción de violencia generalizada apunta también a sugerir que, al menos inicialmente, la violencia no se vive como una guerra o catástrofe, y menos aún se visualiza como el producto de un conjunto de conductas delincuenciales. Si no que aparece como un proceso banal, que ofrece oportunidades, produce acomodamientos y tiene normas y regulaciones. Esta trivialidad, pues, no sólo tiene que ver con el perfil personal de los que están implicados en la violencia, sino también con el hecho de que ésta se expresa por medio de interacciones que no aparecen como ruptura total con las interacciones habituales ni dan origen a nuevas representaciones o nuevos imaginarios.

Hasta hace muy poco, la violencia no había obstaculizado la marcha de la economía¹⁸. Colombia puede incluso enorgullecerse de haber superado la 'década perdida' mejor que todos los demás países de América Latina, incluyendo a Chile. Desde luego, el desarrollo de la economía de la droga creó muchas distorsiones, pero también contribuyó a evitar los desequilibrios de la balanza de pagos. La violencia altera parcialmente el funcionamiento del mercado al someterlo a relaciones de fuerza y a contratos que escapan a la legalidad. Pero, sin embargo, no se trata de una situación completamente nueva: la precariedad del Estado ya había favorecido en el pasado la expansión de actividades ilegales, como el contrabando, las protecciones políticas, el clientelismo, que interferían el curso de la economía¹⁹. Es obvio que la violencia produce costos adicionales de transacción, pero ellos se compensan por la abundancia de capital disponible. Los terratenientes tradicionales pueden verse presionados para vender sus tierras a los narco-

traficantes, pero con frecuencia lo hacen a muy buen precio, y los grandes empresarios industriales o mineros pueden ser víctimas de extorsión, pero trasladan sus costos a los clientes. La continuidad del crecimiento y la impotencia del Estado para asegurar una mínima protección llevan a cada uno a preferir la vía del *free rider* y a retroceder frente a los riesgos de una eventual acción colectiva²⁰.

Es de subrayar que incluso los millares de secuestrados no han llevado, sino hasta hace muy poco, a una protesta masiva. Todos los actores armados recurren a ellos. Todas las víctimas potenciales tratan de protegerse contra este peligro, bien sea acudiendo a sistemas sofisticados de protección, bien sea intentando contratar formas complejas de seguro. Estas estrategias individuales parecen más racionales que las protestas simbólicas. Además, la cantidad de los secuestrados los convierte en una rutina que ya no sorprende. Incluso cuando muchos de ellos terminan trágicamente, son considerados como un componente más de la violencia. Todos están condenados a adaptarse a esta eventualidad. Se puede citar el caso de un político que, secuestrado durante varios meses por las FARC y obligado a pagar un cuantioso rescate, pactaba en las elecciones siguientes una alianza con la Unión Patriótica, el partido apoyado por las FARC.

Por otra parte, la ilegalidad y la violencia generan nuevas oportunidades. Esto es obvio para todas las actividades relacionadas con la economía de la droga, pues se calcula en más de un millón el número de personas que viven directa o indirectamente de ésta y se ha visto que otros muchos estaban de acuerdo con las perspectivas de movilidad social que la acompañan. Por supuesto, esto no quiere decir que la economía de la droga y los mecanismos de violencia benefician a toda la población. Algunos trabajos recientes, que parten de observar la coincidencia entre polos de producción de riqueza y violencia, deducen que la violencia está vinculada a la prosperidad, lo que es una afirmación un tanto simplista que no tiene en cuenta las masas desposeídas que afluyen a esas zonas y que no son invitadas al festín. Otros se refieren a los abundantes recursos financieros capta-

dos por la guerrilla para concluir que la violencia sería una estrategia salvaje de redistribución de ingresos. Al contrario, todo sugiere que, gracias a la violencia, la desigualdad de ingresos, que había tendido a decrecer entre 1978 y 1985, va creciendo nuevamente. La economía de la violencia genera sus excluidos.

Pero, sin embargo, es cierto que la violencia genera oportunidades profesionales que atraen en particular a los sectores más jóvenes de la población.

En muchos aspectos, estas carreras profesionales pueden considerarse como una forma más entre las ofrecidas por el amplio campo de lo informal. Según las estimaciones de un economista, el nivel promedio de las remuneraciones en el sector informal aumentó en un 10.5% entre 1984 y 1992 cuando las del sector formal no subían sino en un 3.1%. Las ventajas aseguradas por el nivel de educación han venido disminuyendo. En cambio, el promedio de remuneración de las actividades delictivas se ha triplicado entre 1980 y 1993. No es sorprendente entonces que un porcentaje creciente de los jóvenes rechace la asistencia a la escuela para lanzarse a las actividades ilegales. A causa de la ineficacia de la justicia, la impunidad es casi total en el caso de los crímenes: un homicidio de cada tres da lugar a la apertura de una investigación, cuatro de cada cien generan una condena. El éxito de los grandes empresarios ilegales constituye un estímulo adicional para buscar oportunidades en la criminalidad. Pero quizá es todavía más atrayente una carrera en la subversión. El código penal de 1980 establecía penas reducidas para los asesinatos 'políticos' con respecto a los asesinatos comunes, y las penas oscilaban entre 3 y 6 años²¹. Como se sabe esto acaba de

ser modificado, pero falta ver cuáles van a ser los efectos de esta modificación

El ingreso en las guerrillas o en las formaciones paramilitares es una carrera como cualquier otra. Unas y otras no solamente producen un salario y medios de subsistencia sino que permiten acceder a un estatus, cuyos símbolos son el uniforme y las armas. Sobre todo permiten hacer parte de una organización, y quizás sea esto lo esencial. La dislocación de la familia y la desorganización social otorgan un atractivo adicional al hecho de participar en grupos que definen modelos de conducta y de disciplina, donde la autoridad de los comandantes sustituye favorablemente, en jóvenes que a menudo sólo tienen quince años o menos, la falta de autoridad de los padres. Esto es aplicable también a las milicias urbanas que agrupan a los jóvenes del barrio. La opción de ingresar en las guerrillas o los grupos paramilitares representa también muchas veces una alternativa al servicio militar. Hay numerosas familias cuyos hijos se reparten entre el ejército, la guerrilla u otra organización.

Estas carreras están lejos de ser rectilíneas. Después de veinte años de violencia, el paso del tiempo ha producido muchos cambios. Es fácil pasar del trabajo para narcotraficantes a ingresar en los grupos paramilitares o a deslizarse hacia la delincuencia difusa. No es tampoco demasiado difícil el paso de las milicias políticas a la criminalidad. El porvenir de los guerrilleros no es menos diversificado: algunos pueden trabajar un tiempo para los narcotraficantes y muchos otros vuelven a la vida civil. Pero también existen algunos que cambian de campo para unirse a los grupos paramilitares. Estos casos, los más interesantes, no son nada excepcionales, ya que una parte

18 Cf. Francisco Thoumi, *Economía política y narcotráfico*, Bogotá, Tercer Mundo, 1994.

19 Esta problemática es subrayada especialmente por Edgar Revéiz en su libro *Democratizar para sobrevivir*, Bogotá, Poligrupo Comunicación, 1989.

20 Como lo ha mostrado muy bien J. A. Bejarano en su capítulo "Democracia, conflicto y eficiencia económica" en J. A. Bejarano, *Construir la Paz*, Bogotá, Presidencia de la República, 1990, p.143-171.

21 Todos estos datos son tomados de dos estudios de M. Rubio, "*Homicidios, justicia, mafia y capital social. Otro ensayo sobre la violencia colombiana*", Documento del CEDE, Universidad de los Andes, 1996; y "*Capital social, educación y delincuencia juvenil en Colombia*", CEDE, Universidad de los Andes, 1996.

importante de los jefes y miembros de esos grupos provienen de la guerrilla. El cambio puede producirse en el momento cuando una zona cae bajo el dominio de los paramilitares, pero también puede darse por causa de circunstancias individuales, por ejemplo, la eventualidad de sufrir una sanción, o las amenazas asociadas a las rivalidades entre guerrillas. Las fases de terror local no hacen sino acentuar esas conversiones. En todo caso, la diversidad de esas trayectorias muestra que el carácter prosaico de la violencia va acompañado de cierta circulación de los individuos entre los múltiples campos de actividad ilegal, paralegal y legal. Es lo mismo que practican las elites, a su manera, por medio de la corrupción.

Además, la presencia local de un protagonista armado no obedece siempre a una lógica de confrontación, sino que puede responder principalmente a una lógica de protección. En un libro sobre el fenómeno mafioso en Sicilia²², D. Gambetta presenta a éste como un sistema de protección que asegura, en un contexto de desconfianza, las condiciones de transacciones que normalmente se fundamentan en la confianza. Este concepto puede, al menos en ciertos casos y con ciertos límites, aplicarse a los grupos armados colombianos que ejercen control sobre territorios definidos. No faltan lugares donde los habitantes, inquietos por la expansión de la violencia desorganizada, se muestran dispuestos a llamar a un protector capaz de imponer una ley. Esta situación se ha producido frecuentemente en las zonas de cultivo de droga, donde la afluencia de colonos atraídos por las perspectivas de ganancias rápidas se tradujo, al principio de los años 1980, en la proliferación de homicidios, por lo que la presencia de las FARC ha sido bien aceptada. Así, las FARC satisfacían a la vez las demandas de orden y la defensa de los intereses de los cultivadores atenuando los problemas de la ausencia del Estado, al imponer sus códigos de justicia y de sanciones, definir las condiciones y los límites del acceso a la tierra²³, que aseguraban que una parte de las tierras quedara dedicada a los cultivos de subsistencia, junto con cierto control de las transacciones con los intermediarios de los traficantes y la protección contra las incursiones militares. Pero las

guerrillas no tienen el monopolio de este tipo de protección, ya que en el Magdalena Medio los paramilitares, que desplazaron a las FARC desde mediados de 1985, cumplen esta misma función en favor de los que no fueron condenados a huir. En los barrios periféricos de muchas ciudades, sometidos a la arbitrariedad de los **sicarios** y otros delincuentes y quedan expuestos a la anomía, las milicias populares han podido asumir el mismo papel asegurando la vigilancia local.

Con frecuencia, la lealtad a la red que controla el territorio es la condición del acceso al mercado laboral, pues cada red instaura una especie de **closed shop union** (mercado sindical cerrado:) en Urabá, tal **finca** bananera 'pertenece' a las FARC, tal otra al EPL. El mismo caso se da en las minas de oro, en numerosas haciendas ganaderas, e incluso ciertas empresas industriales ubicadas en las ciudades controladas por las guerrillas o los paramilitares. Y trabajar ahí supone someterse a las normas de la red. Los repetidos sabotajes realizados por el ELN contra los oleoductos son una manera de crear empleos: el ELN selecciona de antemano la mano de obra que será reclutada para limpiar el petróleo derramado.

La aceptación de la protección no implica necesariamente una adhesión ideológica. Se establece toda una escala de relaciones, desde la participación activa de algunos auxiliadores, como los milicianos con armas ligeras o los colaboradores civiles, declarados o no, hasta la mera simpatía o incluso la adaptación pasiva. Cuando un actor controla un territorio durante lustros, como la guerrilla en varias zonas, se crean hábitos y los habitantes tienden a menudo a percibir el mundo exterior como hostil. Pero, aunque todos tienen que acatar las reglas, muchos pueden mantener una relación esencialmente instrumental con el 'protector'. Las estrategias individuales de adaptación varían, pero es frecuente que los habitantes hagan un cálculo racional que sopesa las ventajas de permanecer en la zona y el costo de la obediencia que se les exige. Según el caso, muchos de ellos pueden decidir transferir su lealtad de un protector a otro, como se produjo en la zona del Magdalena Medio a la que antes se hizo referencia.

Aunque la protección no prohíbe las estrategias individuales de adaptación, sí impide en todos los casos las formas de acción colectiva autónoma. Ya he mencionado el debilitamiento de los actores sociales, pero la misma constatación se aplica a toda expresión de solidaridad tradicional. En las zonas de colonización, los habitantes estaban acostumbrados a cooperar entre ellos para la construcción de infraestructuras de primera necesidad. Las **Juntas de Acción Comunal** tenían un prestigio evidente, pero esas formas de acción común tienden a desaparecer pues los eventuales promotores de estas iniciativas se arriesgan a ser condenados sea a unirse a las filas de los actores armados, o a exponerse a sanciones. Por eso, hay zonas donde no falta el dinero que, sin embargo, presentan un estado de abandono sorprendente. En cuanto a las Juntas de Acción Comunal, ellas cada vez más están bajo el control directo de las organizaciones armadas. Obviamente, las regiones colocadas bajo 'protección' pueden convertirse en el punto de partida de grandes movilizaciones colectivas. Así se pudieron desarrollar grandes movilizaciones campesinas entre 1987-88 y se produjeron de nuevo entre 1995-1996. Sin embargo, esas marchas fueron patrocinadas por las guerrillas, el ELN en el primer caso, las FARC en el segundo. Y la participación en ellas no es nada voluntaria. Por supuesto, los campesinos se unen voluntariamente a esas marchas cuando consideran que promueven sus intereses, pero el entusiasmo decae cuando las marchas se suceden unas a otras, con los riesgos y los sufrimientos que suponen, y cuando la coerción se hace más y más importante para su desarrollo.

Este sistema de demarcación territorial del poder no tiene un carácter totalmente novedoso, pues los partidos tradicionales no obraban de manera diferente en muchos municipios de Colombia. Las facciones o clanes que ejercían el poder obligaban a

menudo a la población a someterse a ellos: era el precio que pagar, no sólo para acceder a los recursos, sino a veces para seguir viviendo en paz, o incluso evitar tener que marcharse. En este sentido, algunos autores hablan de 'clientelismo armado' para subrayar la continuidad con los antiguos clientelismos. Pero hay una diferencia nada despreciable: la inserción o no de estos repartos territoriales en el campo de la política institucional.

Esto quiere decir que el reparto del país entre los actores armados y sus redes de dominación puede ser vivido como una situación ordinaria. Sin embargo, no podemos conformarnos con la lógica de la protección como si constituyera una simple respuesta a una demanda, que lograra establecer un dispositivo de confianza permanente. Numerosos estudiosos de la mafia siciliana objetaron al razonamiento de D. Gambetta que la 'oferta' de protección era seguramente mucho mayor que la demanda, que esa oferta suponía el uso, real o potencial, de la violencia y que, en vez de acabar con una situación de desconfianza, no hacía sino seguir alimentándola.²⁴ Con mayor razón ocurre esto en el caso colombiano donde las redes de seguridad no tienen una implantación muy antigua y, donde, por otra parte, compiten las unas con las otras.

De hecho, la lógica de protección se establece en el marco de la violencia generalizada y de las interferencias entre sus protagonistas. La dimensión de la 'oferta', con la violencia que supone, es, al menos tan importante como la de la demanda. El caso de las zonas de cultivo de droga y de su aceptación de las reglas de las guerrillas está lejos de ser general. Hay numerosos casos en donde la imposición de la protección no responde a ninguna demanda. Cuando un 'protector' sustituye a otro 'protector' en una región, la población no es consultada para nada. Por otra parte, la multiplicidad de las redes implica la existencia de fronteras complejas y fluidas. En efecto, las

22 D. Gambetta, *The sicilian mafia. The business of private protection*, Cambridge, Mass, 1993.-

23 Sin embargo, las leyes de la acumulación capitalista también se imponen a las FARC. En ciertos departamentos, como el Guaviare, se fue estableciendo poco a poco una gran propiedad dedicada a la coca, hasta representar ahora un porcentaje importante de la producción.

24 Cf. R. Catanzaro, "La mafia et les recherches sur la mafia en Italie", *Déviance et société*, vol. 19, No. 2, p.201-213



fronteras entre redes no pasan por regiones fácilmente identificables, sino que atraviesan las regiones, las ciudades, los barrios. Una ciudad importante como Barrancabermeja, uno de los centros de refinación petrolera, está dividido entre barrios paramilitares, del ELN, de las FARC, etc. Las fronteras pueden dividir hasta las cuadras de una misma ciudad, como ocurre en muchos barrios de Medellín o de Bogotá, donde el dominio de cada milicia puede limitarse a un micro-barrio. En Urabá, las fronteras aíslan las fincas unas de las otras según su afiliación, pues la territorialidad no es separable de la actuación de los actores armados. A veces, sin embargo, puede prevalecer la relación inversa, en la cual se comienza por el dominio sobre un territorio y el resultado es la acumulación del poder, incluido el armado. Este es el proceso por el que generalmente han pasado muchas milicias urbanas, que preparan su reconocimiento por medio del establecimiento de su control sobre un barrio o una cuadra, para poder luego entrar en el juego de las interferencias y transacciones de los protagonistas de la violencia. La contrapartida de la lógica de protección en todo caso es la transformación de un territorio en una colcha de retazos de micro-territorios ubicados bajo la tutela de una organización.

Esta violencia inherente a la territorialidad puede permanecer dentro de los límites de la trivialidad y de lo ordinario. Sin embargo, hace falta muy poco para que ella se deslice hacia el terror.



EL TERROR

Lo mismo que en el caso de la violencia, es conveniente distinguir entre dos tipos de terror. El pri-

mero no tiene base territorial, y el segundo se refiere explícitamente a él. El primero no tiene nada que ver con la lógica de protección y el segundo es su expresión perversa. Voy a analizar principalmente el segundo tipo, aunque, es necesario, sin embargo, considerar de entrada el primero, así sea brevemente.

Los narcotraficantes organizan muchas veces un terror territorializado, por medio de los paramilitares. En cambio, el terror en gran escala, que practicaron entre 1987 y 1993, que tuvo mayor resonancia, no tiene ninguna relación con la problemática territorial, sino que se dirigía contra el Estado y la opinión pública con el fin de que la desestabilización del primero y el desasosiego de la segunda condujeran a abandonar las medidas de extradición. Los atentados focalizados contra personalidades de primer plano, políticos o jueces, igual que los atentados ciegos con carros-bombas u otros medios²⁵, no tenían, al menos a primera vista, otras motivaciones. Por supuesto, la trivialidad de la violencia facilita el acudir a tales métodos. En 1984, el cartel de Medellín pudo asesinar a un ministro de la justicia sin provocar un impacto duradero, que no impidió a algunos dirigentes emprender enseguida negociaciones discretas con él. Pero este recurso expresa un cambio novedoso. Por primera vez, un protagonista de la violencia pretende desestabilizar al Estado, lo que nunca se había producido en la larga historia de la violencia anterior. Pudieron ser asesinadas personalidades de primer plano, como Gaitán en 1948, mientras que otros fueron obligados a exiliarse²⁶, pero los protagonistas no atacaban el funcionamiento del propio Estado. Por otra parte, las guerrillas se preciaron durante mucho tiempo de rechazar todo terrorismo, pero esta suerte de prohibición fue levantada. Esto produce una redefinición del campo de la violencia.

Tampoco el terror organizado contra los militantes de la Unión Patriótica y otros activistas sindicales o políticos se inserta en una problemática propiamente territorial, sino que tiene una finalidad principalmente política. La alianza entre narcotraficantes, militares y dirigentes políticos locales se encamina sobre todo a eliminar una oposición política

constituida en el campo de influencia de la guerrilla. Tiene, es cierto, finalidades anexas por parte de los narcotraficantes, como la de reducir la presión ejercida por las guerrillas sobre sus posesiones. Pero la práctica sistemática de un terror político desterritorializado representa claramente otra innovación con respecto a las modalidades antiguas de la violencia.

Las poblaciones campesinas imputan a los militares la mayor parte de la producción del terror, pero los innumerables excesos que ellos cometen en el desarrollo de sus operaciones no bastan para explicar esta acusación general. Es probable que cuente el hecho de que, para muchos, esa sea la única ocasión en que tienen contacto con el 'Estado', y que este Estado no tenga el aspecto que esperaban. Pero más que todo, tiene que ver con el hecho de que los militares actúan mediante incursiones puntuales, sin ocupar el terreno y sin preocuparse casi de constituir redes de protección. El funcionamiento bastante burocrático del ejército no deja a sus dirigentes, constantemente desplazados, la oportunidad de familiarizarse con los habitantes. No solamente golpean a menudo ciegamente, asimilando -cuando les conviene- a campesinos con guerrilleros, sino que, cuando se retiran, dejan de nuevo el terreno libre a las guerrillas. Los individuos no disponen pues de ningún margen para estrategias de adaptación. Por otra parte, los militares cubren a los paramilitares en los cuales delegan de hecho la función tanto de realizar la mayoría de las masacres de envergadura, como de implantarse territorialmente. Los policías urbanos tienen una fama todavía bastante peor. Durante la 'guerra' contra el cartel de Medellín, intervenían de manera similar a los militares en las zonas rurales, haciendo irrupción brutalmente en los barrios de los que se sospechaba que servían de refugio a los sicarios, matando o torturando muchas veces al azar. No cabe duda de que esos abusos de las fuerzas de seguridad incitan a la población a aprobar las coerciones y los

excesos de los demás actores, por lo menos mientras no pasen los límites de lo insostenible.

Llego así al otro tipo de terror, el vinculado con las interacciones entre las redes y el dominio territorial.

Antes he hablado de la complementariedad de la protección y de la violencia. Incluso fuera de las peleas entre los protagonistas, la violencia ordinaria puede fácilmente convertirse en terror.

La prolongación de la violencia lleva en muchos casos a una degeneración de los actores armados que no se traduce sólo en las exacciones y la corrupción. Es el caso de muchas organizaciones de narcotraficantes y, en su último período, del cartel de Medellín, cuando se dedicaron a numerosos arreglos internos de cuentas. Pero tampoco los paramilitares y las guerrillas se han escapado de estos episodios de justicia sumaria. Todas las guerrillas pasaron por sus procesos sangrientos de *depuración*. Ya desde los años setenta, el líder del ELN, Fabio Vásquez Castaño dio el ejemplo al fusilar a la mayoría de los dirigentes de origen universitario que se habían unido a la organización. Las FARC han logrado mantener un mayor secreto sobre esas eliminaciones, pero, sin embargo, éstas han sido numerosas y constantes, unas llevadas a cabo directamente por el Secretariado central y otras, a cargo de los comandantes de los bloques y frentes. Por ejemplo, se sabe que Braulio Herrera, encargado de recuperar la región del Magdalena Medio al final de los años ochenta, realizó ejecuciones masivas, por lo que tuvieron que mandarlo fuera del país. Más recientemente aún, en la guerra que se está desarrollando en Urabá contra los paramilitares, el comandante de uno de los frentes de las FARC ordenó ejecutar a todos los hombres que no dieran prueba



25 Entre los cuales se cuenta la destrucción de un avión de Avianca en pleno vuelo.

26 Como en el caso de algunos de los principales dirigentes del Partido Liberal después de 1950.



de suficiente combatividad. El caso más siniestro es el del frente Ricardo Franco, disidencia de las FARC, cercano durante mucho tiempo al M-19, cuyos dos líderes ejecutaron en 1987 en Tacueyó a casi la totalidad de su tropa, más de 200 personas, con el pretexto de que estaban infiltradas por agentes secretos. Al parecer, la conmoción provocada por esa masacre no fue ajena a la decisión del M-19 de empezar negociaciones con el gobierno y a la pérdida de credibilidad de las guerrillas.

Si el terror puede causar mucho daño dentro de las organizaciones armadas, golpea todavía más a la población. Las exacciones indiferenciadas practicadas al principio de los años 1980 por el frente de las FARC implantado en los alrededores de Puerto Boyacá, donde hasta los más pobres estaban sometidos a impuestos exorbitantes y a secuestros con el fin de exigir rescates, condujeron a buena parte de la población a aliarse a los paramilitares y a someterse a su protección, fundamentada en el miedo y la delación. Las redes de protección suponen la existencia de informantes dispuestos a denunciar rápidamente a todos los 'sospechosos'. La ley del silencio se impone rápidamente entre la población que aprende a desconfiar de todos. Hasta el cruce de las fronteras de la red, aunque sea por las razones comerciales más ordinarias, puede volverse motivo de acusación.

El terror puede verse incrementado todavía más por la dimensión de incertidumbre. Acabo de mencionar el caso del cambio de lealtad de la zona de Puerto Boyacá. Pero existe también el de los desertores que cambian de campo, que es ahora una experiencia suficientemente frecuente como para que la población aprenda a desconfiar de la protección de las redes aparentemente más sólidas, ya que los desertores se llevan consigo las informaciones que permiten sanciones sin piedad, en el caso de que la zona

tenga que cambiar de afiliación. Al respecto, disponemos de indicaciones precisas sobre un pequeño municipio de Santander, La India, corregimiento de Cimitarra²⁷, donde reinó durante mucho tiempo un frente de las FARC, que imponía una protección no exenta de abusos. Empezaron a darse desertiones en favor de los paramilitares, que condujeron al comandante guerrillero a multiplicar los castigos contra la población, hasta el día en que él mismo se pasó al lado de los paramilitares. Se reúnen así todas las condiciones para la desconfianza, con relación a la red de protección pero también hacia los vecinos.

Evidentemente, la situación de terror se hace aún más sensible cuando el territorio se vuelve sitio de

conflicto entre diferentes protagonistas. La 'protección' se convierte en instrumento de guerra, las 'fronteras' en lugar de confrontación indiscriminada. No es casualidad que el Urabá sea la región donde se da el terror más crónico e intenso. Allí están presentes todos los protagonistas porque la región, más allá de la producción de banano, se encuentra en una posición estratégica en los límites con Panamá, ya que por el puerto de Turbo u otras

vías locales transita gran parte de la droga y de las armas. Se pudo lograr que prevalecieran las transacciones, pues durante mucho tiempo, las FARC, las milicias, los narcotraficantes, los paramilitares y su jefe Fidel Castaño, antiguo miembro del cartel de Medellín antes de convertirse en el primer adversario de Pablo Escobar, mantuvieron una especie de modus vivendi dentro del puerto de Turbo. Pero, al mismo tiempo, todos los protagonistas no dejaban de enfrentarse en guerras cuyos ejes de conflicto cambiaron varias veces. Al principio de los años 1980, los propietarios de las plantaciones de plátano llevaron a cabo una lucha implacable contra las organizaciones de trabajadores. De 1985 a 1987, fueron las dos organizaciones guerrilleras instaladas en

*El terror tiene
como propósito
intimidar a toda
la población*

Urabá las que se enfrentaron para extender su implantación, y trasladaron su conflicto a las dos organizaciones sindicales. A partir de 1987, se desarrollaron las fuerzas paramilitares por influjo de los narcotraficantes y de los militares. La repetición de masacres en 1988, que se dirigían sobre todo contra el EPL, da una idea de los medios empleados. En 1991, el EPL entregó las armas. Desde entonces, las FARC y un núcleo disidente del EPL intentaron apoderarse de todos los territorios del EPL. Las masacres se encadenan unas a otras, a veces al ritmo de una o más por semana, como en agosto de 1995, cuando muchos antiguos miembros del EPL se ven empujados a tomar las armas, aliándose a menudo con los militares y paramilitares. Sin embargo, en 1995 comienza la gran ofensiva de los paramilitares que, con el nombre de Asociación de Autodefensa del Urabá y de Córdoba, bajo el liderazgo de Fidel Castaño, empiezan la reconquista de la región en su conjunto, expulsan las FARC, que se ven obligadas a refugiarse en el monte, y hacen desplazar a millares de habitantes.

El entrecruzamiento y desplazamiento de los ejes del enfrentamiento se expresan en la sucesión de episodios de atrocidades. Es cierto que los paramilitares son responsables de un mayor número de ellos que los otros protagonistas, pero también es verdad que todos los protagonistas utilizan el terror y que ninguno tiene el monopolio de las masacres colectivas que se encadenan unas a otras, a veces con el pretexto de venganza. Todos pueden acudir a los servicios de sicarios para cometer asesinatos sin dejar pistas. Los cambios de situación favorecen las deserciones, con lo que aumenta la inseguridad. Durante su ofensiva de 1996, los paramilitares mataron un montón de milicianos ligados con las guerrillas, pero, a la vez, incitaron a otros a unirse a sus filas, usando la coerción o el ofrecimiento de sueldos dos veces superiores a los de las guerrillas. Decenas de guerrilleros abandonaron su organización. Por eso, no es difícil para nadie golpear con precisión. Así, las bandas

asesinas se presentan con frecuencia en los barrios o en los lugares de trabajo con la lista ya preparada de los 'condenados'. Lo que no les impide matar también a ciegas. Vimos cómo las redes están compuestas por capas concéntricas de socios. Y los violentos no siempre distinguen entre el militante y el que solo pertenece a la red por su lugar de residencia. El terror tiene como propósito intimidar a toda la población.

La intensidad del terror en el Urabá no se reduce a las masacres y otros horrores, sino que tiene que ver con el hecho de que la colcha de retazos resultante de las rivalidades entre actores está compuesta por piezas estrechamente mezcladas. No solamente las fincas vecinas, sino los barrios de un mismo municipio, y hasta los miembros de una misma familia pueden depender de redes diferentes. Por eso, la desconfianza reina incluso entre familiares. La 'ley del silencio' no es ya solo una imposición de las redes, sino una regla de prudencia adoptada por los individuos en sus interacciones cotidianas. Se vuelven casi nulas las posibilidades de estrategias individuales de adaptación, fuera del esfuerzo para 'no ver nada' y 'no saber nada'. El desplazamiento forzoso de veredas y barrios enteros muestra que la definición del adversario es muy extensa. En otros sitios, la población tiene la posibilidad de pasarse al dominio de un nuevo protector. Además, los paramilitares tienen apoyos locales, ya que los terratenientes y la burguesía urbana no son los únicos que se alegran discretamente de la expulsión de las guerrillas y de sus afiliados, sino que una parte significativa de los sectores populares, exasperados por sus exacciones y los enfrentamientos interminables, también piensan lo mismo.

El caso de Urabá es excepcional porque la guerra entre las guerrillas añade una dimensión nueva a la violencia y porque ningún actor puede renunciar a mantener alguna presencia en esta zona estratégica. Pero, en cambio, no es excepcional por la mezcla

de terror y de protección, ya que el Magdalena Medio conoce la misma mezcla, igual que muchas otras regiones. En las ciudades, las milicias terminan frecuentemente por convertirse en bandas que se dedican a los chantajes y crímenes. Muchas veces tratan de seguir exceptuando su barrio de sus actividades para sólo actuar en los barrios vecinos, pero el resultado no es muy diferente.

El recurso al terror está acompañado de la puesta en escena del horror para impedir todo intento de resistencia por parte de la población. Durante un tiempo, las armas sofisticadas habían reducido el recurso a la práctica de los rituales de sentencias de muerte usados durante la *Violencia* de los años 1950 cuando los cuerpos eran objeto de mutilaciones cuidadosamente codificadas²⁸. Las masacres colectivas revelan un simbolismo fundamentado en el número y profundamente influenciado por telenovelas norteamericanas o mexicanas. De hecho, los sicarios de Medellín se entrenaban imitando los gestos de los héroes de esas telenovelas. Sin embargo, algunas otras prácticas son tomadas prestadas del episodio anterior, como el envío de amenazas graduales o los signos de una muerte anunciada. Pero el terror reciente, en particular el organizado por los paramilitares, se distingue por el regreso a las antiguas prácticas. Los cuerpos descuartizados son expuestos con frecuencia en los lugares públicos, a modo de advertencia.

No existe recurso alguno para las poblaciones sometidas al terror. Por su parte, las instituciones públicas no ofrecen ninguna protección, pues muchas veces las fuerzas de seguridad son los primeros actores del terror y la justicia, como vimos, brilla por su ausencia. En este contexto, la acción colectiva se encuentra todavía más prohibida que frente a las redes ordinarias de protección. Los alcaldes de la Unión Patriótica, que gozaban en teoría de la confianza de las FARC, se esforzaron en impulsar una gestión al servicio de la comunidad. Amenazados por los paramilitares, estuvieron también expuestos a las exigencias de las FARC y a sus incursiones. Casi todos fueron asesinados. Las FARC daban la impresión de temer la evolución pacifista de esos alcaldes y de re-

signarse fácilmente a que los convirtieran en "mártires". Es cierto que pueden citarse algunos casos en que los líderes locales intentaron organizar la población contra la violencia y lograr así que los actores armados reconocieran su neutralidad, pero hasta ahora esos intentos siempre han fracasado. En 1987, los líderes de la India, municipio ya mencionado, quisieron aceptar ese reto con el apoyo de sectores de la Iglesia y pidieron a los paramilitares y a las guerrillas que respetaran su territorio. Desde que ellos fueron asesinados por los paramilitares en 1990 y, muchos de los habitantes tuvieron que refugiarse en otro lugar, el miedo es de nuevo la norma. En 1995, una mujer, Gloria Cuartas, fue elegida alcaldesa de Apartadó, la ciudad más grande de Urabá, a raíz de un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, incluía a los comunistas, para detener el terror. Se sabe lo que siguió: el terror se incrementó todavía más, y los paramilitares mostraron, con un acto de barbarie²⁹, el caso que hacían de la alcaldesa, mientras que los comunistas denunciaban el acuerdo. Un municipio del Cesar, Aguachica, también quiso lanzarse a la aventura de la neutralidad, tratando de apoyarse en la opinión internacional. Pero la ofensiva de los paramilitares se extiende hoy a este departamento, y en Aguachica se suceden asesinatos y masacres.

De hecho, el terror se traduce por un paso más hacia la desinstitucionalización de la violencia. No es casualidad el que se mencione mucho más el papel de los paramilitares que el de los militares. Los militares han dado repetidas pruebas de su ineficacia operacional, ya que el considerable aumento de su presupuesto en los últimos años - se multiplicó por cinco - nunca se tradujo en una correspondiente mejoría de su eficacia. Aunque excepcionales, las sanciones impuestas a algunos oficiales comprometidos en las atrocidades o el apoyo directo a los paramilitares, generaron lo que los mismos altos mandos llaman "el síndrome de la Procuraduría", que los incita a menudo a una política de prudente espera. Lo que no les impide, sino muy por el contrario, dejar actuar por debajo de cuerda a los paramilitares, cuya eficacia ha sido bastante bien evidenciada. Pero los militares no son los úni-

cos que delegan así la tarea de luchar contra las guerrillas en actores privado, sino que desde 1995 se viene bosquejando un amplio consenso tácito en ese sentido, que incluye especialmente asociaciones de ganaderos y agricultores pero también sectores políticos. La crisis de autoridad del gobierno y el descrédito de las instituciones que ella provoca, no hace sino contribuir a esta situación.



UN TERROR SIN HISTORIA

Con la difusión del terror, la banalidad de la violencia debería acabarse. En efecto, las poblaciones afectadas se encuentran confrontadas con la experiencia de lo intolerable. Los actos de crueldad y de barbarie siempre se insertan, de una u otra manera, en la racionalidad instrumental y estratégica de los protagonistas. Pero son también el signo de un exceso que desborda esa racionalidad, tanto más enigmático cuanto no se refiere a un antagonismo articulado con "idealidades"³⁰, sino que queda insertado en lo prosaico de la violencia, donde se atacan, sin embargo, los fundamentos de la cohesión social o de la pertenencia a una humanidad común. Ahora bien, no es tan obvio que el terror acabe totalmente con la banalización de la violencia. En esta última parte se trata de explicar por qué.

La primera razón tiene que ver con el contexto institucional, que presenta dos aspectos contradictorios pero que contribuyen paralelamente a atenuar la visibilidad del terror.

Por una parte, las regulaciones institucionales afrontan el contragolpe de la violencia. Nos referimos a la ineficacia de la justicia, que es un elemento fundamental para la banalización del terror. Sin embargo, no es el único. Las mismas normas jurídicas han perdido su función creadora de instituciones al convertirse en objeto de transacción. El sistema de **negociación de penas** instaurado en 1991 fue visto rápidamente como un instrumento que conducía a una negociación discreta con los narcotraficantes y las penas irrisorias que se les aplicó, por lo menos durante un tiempo³¹, contribuyeron a la sensación de impunidad. En 1993, la reforma del código penal se hizo de acuerdo con los abogados de estos narcotraficantes. De manera general, la corrupción de lo políticos hasta el más alto nivel muestra que las reglas de la informalidad y de la ilegalidad se imponen hasta en las instituciones. A partir de este momento, ellas parecen verse arrastradas al campo de la violencia.

Por otra parte, Colombia no deja de seguir apelando al Estado de derecho. Incluso, la Constitución de 1991 va muy lejos en la instauración de mecanismos de protección y ampliación de la vida democrática. Organismos de "defensa de los derechos humanos" existen en todas las instituciones, incluida la militar. Aunque los militares tienen una amplia libertad para la elección de tácticas y medios de acción, no pueden liberarse de su subordinación

28 Cf. María Victoria Uribe, *Matar, rematar y contramatar, Las masacres de la Violencia en el Tolima*, Bogotá, CINEP, 1992.

29. Decapitaron a un niño de pocos años, en presencia de Gloria Cuartas y de los alumnos de una escuela.

30 Esta clase de antagonismo está en el centro de la reflexión de E. Balibar en el texto "Violence: idéalité et cruauté", in F. Héritier (dir.) *De la Violence*, Paris, Editions Odile Jacob, 1996, pp.55-58. Para él, se trata de relacionar la afirmación de ideales con la violencia.

31 Algunos líderes del cartel de Medellín, como los hermanos Ochoa, fueron condenados sólo a penas de dos años. Uno de los responsables del "cartel del Norte del Valle del Cauca", sospechoso de ser el autor de múltiples masacres colectivas, fue condenado sólo a una pena de tres años, que luego se extendió a seis años. Frente a la medida de "descertificación" infligida por los Estados Unidos a Colombia, el gobierno y el congreso acaban de aumentar las penas a final de 1996 y de tomar medidas para poder expropiar los bienes adquiridos por narcotraficantes. Teniendo en cuenta el sistema sofisticado de disimulación de estos bienes registrados en el nombre de personas virtuales, se puede dudar que esta última medida tenga efectos en el corto plazo.

frente al poder civil³². Se ha llegado, como vimos, a tomar sanciones contra algunos mandos, incluso de alto nivel, y se ha llevado a cabo una profunda depuración en la policía. Las acciones realizadas por la Fiscalía desde hace dos años han tenido por lo menos el efecto de poner fin a la aceptación social que tenían los narcotraficantes y de sacar a la luz la corrupción política. La Corte Constitucional tiene competencia para decidir sobre la justificación de los estados de excepción. Que se sepa, estos tipos de medidas no son habituales en los países latinoamericanos que están en guerra "contra la subversión". Incluso el mismo término de "guerra" está casi prohibido, tanto en el lenguaje del gobierno como en el de los medios de comunicación y de la opinión pública. Desde 1982, el gobierno inició muchos diálogos con las guerrillas, que tuvieron por lo menos el resultado, además de la entrega de armas del M-19, del EPL, del Quintín Lame y de otras organizaciones menores, la pérdida de prestigio político de las guerrillas todavía activas. En cuanto a la opinión, ésta rechaza constantemente la idea de una guerra abierta, tal vez con la esperanza de llegar a una solución negociada de conjunto, en la mayoría de los casos por escepticismo sobre las posibilidades de una salida militar y también por temor a las consecuencias que ella representaría para los espacios de libertad. Pero esta adhesión formal al Estado de derecho no interrumpe la violencia, sino que, al contrario, frecuentemente le abre un espacio mayor, donde parecen inseparables el "orden" y la "violencia"³³. Esta adhesión formal conduce sobre todo a reducir la visibilidad tanto de la violencia como del terror,



que toman el aspecto de un residuo irreductible del no-derecho.

La segunda razón es que el mismo terror no se inscribe en un conflicto amigo/enemigo. En ciertas zonas y algunos momentos es posible percibir una oposición de ese estilo. Sin lugar a dudas, los enfrentamientos entre paramilitares y guerrillas tienen el aspecto de una guerra sin piedad, que interrumpe las transacciones habituales y expresan también una innegable polarización social más profunda. Pero se siguen dando las transacciones entre los protagonistas de la guerra en otras regiones, siempre en relación con el funcionamiento de la economía de la droga. Es posible que la rentabilidad de esta economía sea mucho menor que antes, pues los precios internos sufren los efectos de cierta desorganización de las redes después de la detención de numerosos líderes de los carteles y del desvío del tráfico hacia otros países como México. Sin embargo, los datos disponibles tienden a mostrar que no se han reducido las superficies dedicadas al cultivo de coca mientras que siguen aumentando las dedicadas al cultivo de la amapola. Las FARC continúan estando completamente implicadas en ese desarrollo. Incluso la producción de la heroína se desarrolla con su apoyo, en medio de un pequeño campesinado tradicionalmente sensible a su influencia. Continúa así el juego con múltiples matices, puesto que los narcotraficantes y las FARC son aliados en un sitio y adversarios en otro. Tampoco el terror cuestiona el carácter prosaico de la violencia. Muchos intereses se esconden detrás de la intervención de los paramilitares. El terror se autofinancia sin problema, en la medida en que el precio de las tierras y de los negocios se revalúa significativamente en las regiones reconquistadas.

Cuando aparece la confrontación amigo-enemigo en el nivel local, sólo implica a los protagonistas y sus afiliados. Obviamente, en las zonas de terror, la población está atrapada dentro de las relaciones de fuerza. Pero, sin embargo, la inmensa mayoría no las lee en términos políticos, ya que las referencias políticas han perdido casi todo su significado para ella. Así lo muestran las tasas de abstención, que alcanzan ya el 80% en muchas elecciones. Las mismas guerrillas dan testimonio de la desvalorización de la política, cuando se conforman con controlar la población sin pretender ganarse su lealtad e incluso cuando renuncian con frecuencia a presentar candidatos más o menos simpatizantes para apoyar los de los partidos tradicionales, y optan más bien por someterlos luego a su tutela. En muchos aspectos, se trata de una sociedad donde está desapareciendo la política moderna en su función creadora de institucionalidad. En ciertos tópicos, se pueden encontrar huellas de la política del siglo XIX que se fundamentaba en las pertenencias colectivas y las interacciones clientelistas³⁴, pero con la diferencia de que ahora las pertenencias colectivas y las clientelas se forjan en muchos sitios sobre la mera coerción. Las relaciones de fuerza que cruzan la sociedad son relaciones de hecho, igual que los enfrentamientos locales. No ponen en juego un imaginario cualquiera ni difunden una representación general de un antagonismo político irremediable.

La tercera razón se ubica en la memoria de las experiencias anteriores de la violencia, especialmente el episodio de **La Violencia** de 1946 a 1964. Esta

memoria presenta también rasgos contradictorios. Es la memoria de una guerra civil entre los dos partidos tradicionales, que se inscribe consiguientemente en una visión "amigo-enemigo". Las huellas que dejó, teniendo en cuenta los horrores que acompañaron este enfrentamiento, contribuyen al rechazo actual a una confrontación totalizante. Pero, al mismo tiempo, se trata de una memoria que no tiene una forma socialmente reconocida, ya que el acuerdo político que puso oficialmente un término a La Violencia en 1958, con la instauración del Frente Nacional, implicaba que se olvidaran los eventos anteriores. Con mucho, se reconocía que un componente de barbarie había emergido durante un tiempo, y la noción de barbarie suponía absolver las elites por el papel, bastante decisivo, que habían tenido en la violencia, y a imputarla únicamente a la inmadurez de las clases populares. A ellas sólo les quedaba el recuerdo de una humillación: habían peleado por Otros, en el marco de las lealtades que los ligaban a ellos, habían proporcionado la casi totalidad de las víctimas, y se encontraban al final en el banquillo de los acusados. La experiencia que habían vivido no se inscribía en una historia que tuviera sentido, sino que se quedaba en la condición de una infrahistoria desprovista de expresión.

No es una casualidad el que la memoria de **La Violencia** se exprese de tres maneras apenas articuladas entre sí. Primero se la formula por medio de la referencia a la oposición de los dos partidos, que es una manera de descuidar las otras dimensiones de **La Violencia**, entre otras, la de los intereses socio-económicos que intervenían en ella y de aceptar la posi-

32 Algunos autores como F. Leal Buitrago (cf. *El oficio de la guerra, La Seguridad Nacional en Colombia*, Bogotá, Tercer Mundo, 1994) atribuyen a las fuerzas militares colombianas una "autonomía" casi completa. Además de que el término no está claro, hay que distinguir entre la capacidad de imponer un proyecto de sociedad al poder civil (como los militares argentinos o brasileños) y la mera autonomía operacional. Considerados siempre con desprecio por las elites sociales, prisioneros de la fuerte tradición civilista, dotados en las Escuelas de guerra de una formación geopolítica limitada, sometidos a las decisiones del Congreso para su presupuesto, muy reducido durante mucho tiempo, los militares no han podido afirmarse mucho en el campo político. Como contrapartida, las elites civiles les dejaron actuar libremente en el campo de las operaciones militares. Pero se trata de un regalo envenenado. En ausencia de objetivos políticos claros, los militares actúan solo coyunturalmente. La referencia a la "seguridad nacional" es puramente retórica. No se ven dirigentes militares que hayan elaborado una teoría de esa seguridad.

33 Daniel Pecaute, *L'ordre et la Violence. Evolution sociopolitique de la Colombie entre 1930 et 1953*, París, Editions de l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, 1987. Publicado en español por Ed. Siglo XXI y CEREC, Bogotá, 1987.

34 Cf. F-X. Guerra, *Le Mexique, De l'Ancien Régime à la Révolution*, 2 vol, Paris, L'harmattan, 1985, publicado en español por el Fondo de Cultura Económico de México y M-D. Demélas, *L'invention politique, Bolivie, Equateur, Pérou au XIX^e siècle*, Paris, ERC, 1992.

ción de subordinación de las clases populares con respecto a las elites. Además, esas referencias partidistas han perdido ahora su significado de manera que los sufrimientos padecidos en su nombre parecen hoy arcaicos. Luego, la memoria se expresa por medio de relatos individuales que no logran integrarse en un relato colectivo, lo que traduce el carácter fragmentado y local de las experiencias. Pero también muestra que no existen sino puntos de vista separados y sumergidos en la sucesión de incidentes, de la que no surge un escenario global que implicaría que los puntos de vista separados se integraran en uno o varios puntos de vista de conjunto. La experiencia colectiva sólo toma forma a través de una lectura mítica, que es la tercera forma de la memoria. Así, las víctimas afirman que la violencia está presente "desde siempre", pues la de 1946 es la continuación de la de 1932-1933, la de 1932-1933 la continuación de la Guerra de los Mil Días, y la Guerra de los Mil Días la continuación de todas las guerras civiles del siglo XIX. Evocan la "violencia" como una especie de fenómeno anónimo o como una catástrofe comparable con los desastres naturales y atribuyen a los efectos de la violencia todo lo que les sucedió desde entonces: migraciones, cambio de actividades, adopción de otros valores. Entonces, la violencia toma efectivamente la apariencia de un mito.

Esta memoria fragmentada contribuye a construir la manera como se perciben los fenómenos actuales. Permanece visible la experiencia de la humillación en la rabia de muchos jóvenes de las clases populares que, de una forma u otra, participan en la violencia actual, dando la impresión de querer retomar la continuación de los eventos anteriores, bien sea para darle otra conclusión bien sea para ir aún más lejos en la infrahistoria. Su desconfianza frente al Estado y los dirigentes políticos se nutre de un viejo resentimiento. La división partidista, por superada que esté, deja huellas en la sensibilidad de muchos sectores de la población. También permanece visible la fragmentación de las opiniones. Puesto que la violencia impide la acción colectiva y obliga al repliegue del individuo sobre sí mismo, esta

individualización negativa nos devuelve nuevamente a la herencia de las desventuras de la disolución del tejido social. Las representaciones míticas no han perdido nada de su poder, pues predomina más que nunca la convicción de que la violencia del presente es la misma del pasado y que las relaciones de fuerza están en el centro del funcionamiento de la sociedad.

Tal memoria contribuye pues a que la violencia y el terror se banalicen como si fueran parte del orden de las cosas y hace más difícil la percepción de lo nuevo de la situación actual y consiguientemente el dar sentido a lo que ocurre. Esta confusión no se reduce sólo a las regiones de colonización reciente donde la autoridad del Estado nunca se ejerció sino en forma precaria sino que también se manifiesta en las regiones integradas desde hace mucho tiempo a la economía comercial y las ciudades.

Al respecto, se puede citar el ejemplo de un municipio importante del Norte del Valle, Trujillo, ubicado cerca de uno de los principales ejes de la carretera y uno de los polos de la producción de café³⁵. No hay un caso mejor para ilustrar las continuidades y discontinuidades de los fenómenos de violencia.

Fundado en 1931, este municipio fue dominado primero por los caciques liberales cuyo estilo de comportamiento logró que la mayoría de los nuevos colonos pertenecieran a su partido, llegando hasta reclutarlos en las cárceles. Los primeros conflictos sociales acompañaron la apropiación de las tierras, supuestamente públicas, pero que eran reclamadas por un notable local que pretendía tener títulos de la época colonial. A partir de 1942, los líderes conservadores empezaron a querer conseguirse una clientela. La Violencia les dio la oportunidad de lograr sus fines, ya que las masacres y el terror permitieron "conservatizar" completamente el municipio. La mayoría de los antiguos habitantes tuvieron que huir o pasarse al Partido Conservador. Por medio de la compra de las tierras "abandonadas" a precio regalado, uno de los líderes conservadores adquirió una fortuna y un poder que hicieron de él durante más de treinta años el gamonal incuestionado, llevándolo a desempeñar un papel que llega hasta la política de-

partamental y nacional. Aunque el municipio era conservador en un 90%, la violencia no dejó de estar al orden del día, pero asociada ahora con la competencia entre las facciones conservadoras. El gamonal mantuvo su dominación a través del recurso permanente al terror, a veces asesinando él mismo a sus opositores, a veces usando abiertamente a sus hombres de confianza para eliminarlos, obligando a huir a sus seguidores, y manteniendo así un control estrecho sobre la población. Esto no le impide recibir un homenaje de los dirigentes nacionales del partido, ya en 1978. A partir de 1980, todos los protagonistas de la nueva violencia hacen presencia en el municipio. El ELN implanta allí un frente que gana simpatías entre muchos campesinos. Un poderoso narcotraficante, que vive en el municipio vecino, empieza a apropiarse de las tierras. Los herederos del gamonal usan todos los medios para mantener su dominio. Los militares están en el lugar. El cura intenta mantener un *modus vivendi*. Por todo ello, el miedo está permanentemente presente, pues todos saben que el terror puede sobrevenir de un momento a otro. Tres incidentes van efectivamente a desencadenar la tragedia. En 1990 llega también un núcleo disidente del M19 que pretende extorsionar al narcotraficante. En la misma época, el ELN organiza una marcha campesina, en la que los campesinos participan obligados a la fuerza, hacia la plaza de Trujillo. A principios de 1991, un militar es asesinado en una emboscada. En los días siguientes, los militares y los paramilitares vinculados a los narcotraficantes liquidan a todos los 'sospechosos' uno tras otro. Los muertos pasarán de 120, incluyendo el cura. Los hechos terminaron por ser revelados, después de permanecer ocultos durante mucho tiempo. Incluso el Estado se vio obligado, por primera vez, a admitir oficialmente su responsabilidad.

Este caso permite hacer algunas observaciones:

1. Es obvio que los actores y escenarios de la violencia son muy diferentes en 1930, en 1950, 1960-

70 y en 1990, pero, sin embargo, los episodios se suceden con suficiente frecuencia para dar la sensación de continuidad. Los procesos de construcción social de la memoria y de integración de los hechos en una historia se complican por la ausencia de puntos de referencia o de fijación.

2. La violencia abierta aparece claramente como un componente de toda relación de poder, pues cruza totalmente las instituciones. Todavía en 1978, después de veinte años de Frente Nacional, los asesinatos cometidos por un jefe local no se consideran como violación al Estado de derecho.

3. Los derechos civiles mínimos siguen siendo precarios, como ocurre con el derecho de propiedad. La obtención de un título de propiedad supone trámites complejos, pero la violencia despoja de su validez incluso a los títulos mejor establecidos, como son en principio los de los campesinos de las regiones cafeteras. El universo campesino queda entonces en situación de inseguridad permanente.

4. Incluso la ciudadanía política es también precaria. Nada la protege. De igual manera la identidad colectiva es totalmente heterónoma, sometida como está al dominio de las redes de poder. La relación con el gamonal no es fundamentalmente diferente de la que se tiene con las guerrillas u otras fuerzas.

5. El tránsito de la violencia ordinaria al terror se efectúa sin mayor ruptura, aunque el hecho del terror parezca romper la continuidad normal de los acontecimientos. Solo excepcionalmente, se lo reconoce oficialmente, como el caso de la masacre de 1991, pues habitualmente el acontecimiento no se puede inscribir en ninguna trama constituida.

6. En un municipio como éste, se hace difícil incluso hablar todavía de fronteras con relación a la violencia actual, así sean invisibles, ya que la población está atrapada permanentemente en el medio de las interacciones entre los múltiples protagonistas.

7. Sin duda, el terror local se inserta en el conjunto de los fenómenos de terror de nivel nacional, pero

35 Todos los elementos del relato que sigue son tomados del excelente libro de Adolfo León Atehortúa Cruz, *El poder y la sangre, Las historias de Trujillo, Valle*, Bogotá, CINEP, 1996.

este horizonte más amplio apenas tiene significado para los que están inmersos en él. Esta es otra razón para que el terror no se integre fácilmente en una historia más amplia, pues en buena medida, no es representable.



CONCLUSIÓN

Banalidad de la violencia, imposibilidad de construir una representación del terror que tenga sentido: tales son los dos temas que he querido sacar a la luz. Hay varios otros relacionados con ellos, de los cuales quiero referirme solo a dos: la fragmentación de la noción de individuo y la dislocación de la opinión.

He hablado de experiencias individuales de la violencia y del terror. Pero, ¿de qué individuo se trata? El individuo se encuentra de hecho en el choque entre diversas tensiones. Encerrado entre redes de dominación, forzado a adoptar estrategias de supervivencia, se muestra escéptico con respecto a las instituciones, pero sigue pidiendo "la ayuda del Estado". No existe síntesis entre esas múltiples tensiones. Por eso, no son nada evidentes la misma identidad del individuo, ni su permanencia en el tiempo³⁶. No es casual el que la única expresión de esta permanencia se encuentre en el relato de una trayectoria que lo va conduciendo de una situación a otra.

La opinión pública no está colocada en mejor situación, pues solo reacciona frente al acontecimiento cuando éste reviste una dimensión simbólica mayor. Y aún, esos acontecimientos se olvidan rápidamente, pues unos reemplazan a los otros. Además, la emoción se agota. Fuera de estos momentos fuertes, la opinión apenas se manifiesta. No toma ver-

daderamente forma acerca del narcotráfico, la política frente a las guerrillas, los fenómenos de violencia, la corrupción. O, lo que es lo mismo, va evolucionado según las circunstancias, yendo de una inclinación a la contraria, pasando de la demanda de transacciones sin rumbo fijo a la demanda de soluciones de fuerza. Esto ocurre **a fortiori** frente al terror, ya que los forjadores de opinión rara vez están expuestos a él. Están ya lejanas las masacres en serie de Urabá. Las primeras en ocurrir pudieron causar sorpresa, pero, al multiplicarse, se convierten en diversos hechos aislados. Cuando la violencia penetra más profundamente hasta en las ciudades, aumenta el desasosiego y se debilitan los tradicionales puntos de referencia, como lo atestigua la falta de reacción frente a los avances actuales de los paramilitares, con su cortejo de horrores.

La violencia, como hemos visto, se convierte en un modo de funcionamiento que corroe las mismas instituciones. Por supuesto, se mantiene el Estado de derecho pero sin tener casi ningún control sobre el curso de los acontecimientos. Es cierto que la intervención de un actor concreto, los Estados Unidos, introdujo brutalmente un tercero en discordia en las interacciones entre protagonistas, haciéndolos aparecer a todos como miembros de una comunidad delincuente. Sin embargo, parecen obvios los límites del método de los ultimátums: pueden hacer que la situación se perciba desde un nuevo ángulo pero se parecen mucho también a la injerencia de un protagonista adicional. De todas formas, los Estados Unidos no tienen necesariamente títulos, aparte de la relación de fuerza, para identificarse con la Ley y todavía menos, para convencer de esa identificación a los colombianos, incluso cuando las leyes colombianas fallan.

.....

36 Sobre este tema, cfr. P. Ricoeur, *Soi-même comme autre*, París, Editions Du Seuil, 1990.